

El dilema del régimen es amañar o perder las elecciones del 28 de julio.

Una aclamación de motocicletas, vuvuzelas, música salsa y cánticos de "este gobierno va a caer" llenó las calles de Caracas el 4 de julio, en un mitin de la oposición en la capital para marcar el inicio de 24 días de campaña oficial antes de las elecciones presidenciales. La mayoría de los miles de asistentes estaban allí para ver a María Corina Machado, la popular líder de la oposición venezolana, que se ha convertido en un símbolo de la resistencia al régimen autoritario del Presidente Nicolás Maduro. Subida a un camión y vestida con jeans, lanzó besos de agradecimiento a sus vertiginosos seguidores. "Estamos contando los días para ser libres", gritaba una mujer al paso del convoy.

En las últimas elecciones presidenciales de 2018, Maduro se aseguró la reelección inhabilitando a los principales candidatos y partidos de la oposición y desincentivando el voto (la participación fue del 46%). Estas elecciones parecen más complicadas para el régimen: robarlas frente a una oposición unida y aparentemente movilizadas, y con una desilusión palpable entre muchos partidarios del gobierno, podría no ser fácil.

El pasado mes de octubre, el gobierno y la oposición se reunieron en Barbados y acordaron unas normas para garantizar unas elecciones más justas, con observadores internacionales. A cambio, Estados Unidos levantó las sanciones a las industrias petrolera y minera de Venezuela impuestas por Donald Trump. Pero el gobierno se resistió parcialmente. Después de que Machado ganara abrumadoramente unas primarias de la oposición que contaron con un gran apoyo, las autoridades confirmaron su inhabilitación para el cargo, durante 15 años, por motivos inventados. Más tarde retiró una invitación a la Unión Europea para que enviara observadores electorales, alegando sus sanciones contra personas del régimen.

En el pasado, Machado, conservadora y perteneciente a una acaudalada familia de industriales, argumentó que votar contra una dictadura no tenía sentido. Sin dejarse intimidar por su prohibición, esta vez ha instado a todo el mundo a votar por un sustituto: Edmundo González, un exembajador de 74 años que nunca se ha presentado a las elecciones. En un sondeo reali-



MACHADO suele acompañar a González en sus mítines de campaña.

Votando contra Maduro:

Un nuevo peligro para el autócrata venezolano

zado el mes pasado por la encuestadora Delphos, el 52% de los consultados lo apoyaron, mientras que Maduro solo obtuvo el 25%.

Durante meses, Machado ha recorrido el país celebrando mítines en ciudades de provincias y pueblos rurales. El gobierno le prohíbe tomar vuelos, por lo que viaja en auto, barco o incluso canoa. Ahora, a menudo acompañada por Edmundo González, es recibida por multitudes en cada parada. Sus discursos, por lo general breves, se centran en la corrupción y la mala gestión del régimen de Maduro, cuyo gobierno ha empobrecido y desgarrado a Venezuela: según la ONU, 7,7 millones de personas, es decir, una cuarta parte de la población, han emigrado. Su mensaje

es que las elecciones del 28 de julio son una oportunidad: sea cual sea el fraude que intente el régimen, un voto masivo de protesta podría por fin derrocarlo, un cuarto de siglo después de que Hugo Chávez, predecesor y mentor de Maduro, tomara el poder.



Chávez, fallecido en 2013, fue bendecido con carisma y un enorme auge del petróleo. No necesitaba hacer trampas. Utilizó sus victorias electorales para centralizar el poder, haciéndose con el control del poder judicial, las Fuerzas Armadas, la mayoría de los medios de comunicación y la autoridad electoral. Maduro, un rudo conductor de autobús, nunca ha gozado de un apoyo mayoritario. En 2015, cuando la oposición ganó inesperadamente las elec-

ciones a la Asamblea Nacional en la última votación razonablemente justa celebrada en Venezuela, el gobierno utilizó sus tribunales fíctos para castrar al Poder Legislativo. En diciembre organizó un referéndum sobre si Venezuela debía anexionarse dos tercios de la vecina Guyana, en un intento de utilizar el patriotismo para unir a las masas. Fue un fracaso. Aunque el gobierno afirmó que habían votado 10,4 millones de personas, observadores independientes calcularon que la cifra no superaba los 3 millones.

El gobierno culpa del colapso económico a las sanciones (aunque es anterior a ellas), de las que dice que la oposición es cómplice. Pero las encuestas internas del régimen muestran que, en una votación justa, Maduro estaría "totalmente condenado", según una fuente del guberna-

te Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Sin embargo, parece decidido a aferrarse al poder mediante la intimidación. Al menos 37 activistas de la oposición han sido detenidos este año. La autoridad fiscal ha tomado medidas para cerrar cualquier hotel o incluso merendero que Machado o González utilicen durante su campaña. Un establecimiento, una tienda familiar de empanadas en un pueblo del estado de Guárico, fue allanado 30 minutos después de que la Sra. Machado se detuviera a desayunar. "Es injusto porque recibimos a todo el que entra", dijo la propietaria, Corina Hernández.

El gobierno podría intentar cambiar las reglas. Hay rumores de que las elecciones podrían aplazarse, quizás fabricando un incidente fronterizo con Guyana o incluso un supuesto atentado

contra Maduro. El 8 de julio, el fiscal general, Tarek William Saab, denunció que un grupo paramilitar colombiano había sido contactado por representantes de la oposición. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, afirmó que la oposición intentaba crear un ambiente de "guerra civil".

Algunos en la oposición temen que el gobierno también intente crear confusión descalificando a la principal alianza opositora, conocida como Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Es uno de los tres partidos que apoyan a González. En ese caso, si un votante pulsara por error la tarjeta de la MUD en la pantalla táctil de las máquinas de votación, su elección sería nula.

Este engaño deliberado tendría un costo. "Si quitan la tarjeta de la MUD, no veo cómo podemos reconocer el resultado de las elecciones", dijo un diplomático europeo en Caracas. Estados Unidos probablemente haría lo mismo. En abril volvió a imponer algunas sanciones por el incumplimiento del acuerdo de Barbados por parte del Ejecutivo. En una reanudación de las conversaciones directas con el gobierno a través de un video llamada el 3 de julio, la administración de Joe Biden volvió a pedir elecciones "competitivas e inclusivas". Maduro espera un mayor alivio de las sanciones y que el gobierno elimine una recompensa de 15 millones de dólares, impuesta en 2020, por información que conduzca a su detención.

Un fraude flagrante también podría crear fricciones con las Fuerzas Armadas, árbitro último del poder en Venezuela. Los altos mandos se han mantenido fieles durante mucho tiempo a la memoria de Chávez, el mismo oficial del ejército. Muchos generales se han beneficiado del capitalismo de amiguetes que ha florecido bajo el mandato de Maduro. ¿Podría haber límites a esa lealtad? "Si se roban las elecciones, estoy seguro de que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se unirá a la desobediencia civil", dijo un general en activo anónimo, en un reportaje publicado en mayo por Sebastiana Barráez, corresponsal de Defensa venezolana ahora en el exilio.

Es inverosímil, pero no imposible, que el gobierno pierda y acepte la derrota, abriendo lo que sería una complicada transición. En el mitin de la oposición en Caracas, un anciano observaba cómo la multitud abucheaba a un coche que pasaba cubierto de logotipos del PSUV. "Aquí las dictaduras son todas iguales", decía. "Parecen tan poderosas. Y luego no lo son". En cualquier caso, al menos la señora Machado ha dado a muchos venezolanos esperanzas, aunque sean escasas.